**PROCESO EJECUTIVO / OBLIGACIONES EN DINERO / LÍQUIDAS O LIQUIDABLES**

… el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, previene que, en materia laboral, son exigibles por la vía ejecutiva, entre otras, las obligaciones laborales que emanen de una decisión judicial en firme… en cuanto a la ejecución de sumas de dinero y obligaciones periódicas o de tracto sucesivo, como la que aquí se persigue, previene el artículo 431 ídem, que “Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda…” En este orden de ideas, el hecho de que una providencia verse sobre una “cantidad liquida” que de acuerdo con el artículo 424 ídem, no solo es la expresada en una cifra numérica… sino aquella que sea liquidable por operación aritmética, siempre que no esté sujeta a deducciones indeterminadas, la aleja de aquellas condenas denominadas en abstracto…

**PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO: SENTENCIA / PAGO DE UNA PENSIÓN / PUEDE LIQUIDARSE EN LA EJECUCIÓN**

Sobre esta misma materia tuvo oportunidad de pronunciarse el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, en sentencia del 27 de julio de 2005, Rad. 21517, en la que señaló que la concreción de una condena en la que se ordenó el pago de una pensión, sin establecer el monto de la misma, era posible “a partir de los datos consignados tanto en la parte motiva, como en la resolutiva de la providencia atacada, y sin que para ello deba acudirse a operaciones aritméticas complejas o a hacer deducciones indeterminadas” y concluyó que “el hecho de que en la sentencia no se hubiera señalado en forma específica la cantidad numérica del monto de la pensión del actor, no significa que la condena haya sido ‘in genere’…

Radicación No.: 66001310500420080008302

Proceso: Ejecutivo Laboral

Demandante: Lucy Henao Gómez y otro.

Demandado: Colfondos S.A.

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA DE DECISIÓN LABORAL No. 1**

Magistrada Ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

Pereira, Risaralda, treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

 Acta No. 170A del 26 de octubre de 2023

Teniendo en cuenta que el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, estableció que en la especialidad laboral se proferirán por escrito las providencias de segunda instancia en las que se surta el grado jurisdiccional de consulta o se resuelva el recurso de apelación de autos o sentencias, la Sala de Decisión Laboral N° 4 Presidida por el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ del Tribunal Superior de Pereira, integrada por la Magistrada ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN quien en esta oportunidad actuará como Ponente y el Magistrado GERMÁN DARÍO GOEZ VINASCO, procede a proferir el siguiente auto escrito dentro del proceso **ejecutivo laboral** instaurado por **Lucy Henao Gómez** y **Álvaro Eduardo Echeverry Henao** en contra de la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A.**

**CUESTIÓN PREVIA**

El proyecto inicial presentado por el Magistrado Julio César Salazar Muñoz no fue avalado por el resto de la Sala y por eso la Magistrada que le sigue en turno, Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, presenta la ponencia de las mayorías, advirtiendo que, dentro del proyecto, por economía procesal se acogieron varios acápites redactados en la ponencia original, frente a los cuales no se presentó discusión alguna.

**PUNTO A TRATAR**

Por medio de esta providencia procede la Sala a resolver el recurso de presentado por Lucy Henao Gómez y Álvaro Eduardo Echeverry Henao contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Pereira el día 29 de noviembre de 2022, por medio del cual se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo laboral. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

1. **ANTECEDENTES**

Mediante sentencia adiada 10 de noviembre de 2009 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira declaró que Lucy Henao Gómez y Álvaro Eduardo Echeverry Henao tenían derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor Álvaro Echeverry Castado, en calidad de cónyuge e hijo, respectivamente, a partir del 22 de octubre de 2007.

Consecuente con esa declaración, se ordenó a Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hoy AFP Colfondos S.A. a pagar la mesada pensional en la cuantía que esa entidad determine, teniendo en cuenta para ello lo establecido por la ley y las cotizaciones realizadas por el causante, valor que, en cualquier caso, no podía ser inferior al salario mínimo y se advirtió que al señor Álvaro Eduardo Echeverri Henao (hijo) se le pagaría la mesada pensional en porcentaje del 50% desde el 22 de octubre de 2007 hasta el 22 de octubre de 2010, fecha desde la cual se debería continuar pagando a la señora Lucy Henao Gómez en forma vitalicia y en porcentaje del 100%.

Recurrida la decisión por parte del fondo de pensiones, la misma fue confirmada por esta Sala de decisión, al concluir que, si bien, el actor no dejó causada la pensión de sobrevivientes bajo los postulados de la Ley 797 de 2003, normatividad aplicable debido a que el deceso ocurrió el 22 de octubre de 2007, en la aplicación del principio de condición más beneficiosa, reunía los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de sobrevivientes, debido a que había cotizado 414,4286 semanas antes del 1 de abril de 1994.

La sentencia fue casada por Sala de Casación Laboral el 14 de marzo de 2018 al decidir el recurso extraordinario de casación formulado por el mismo recurrente, señalando la imposibilidad de hacer una aplicación plusultractiva de la Ley, y en consecuencia absolvió de las pretensiones a la pasiva.[[1]](#footnote-1) Sin embargo, la decisión fue puesta en consideración de la justicia constitucional, mediante acción de tutela, resuelta en impugnación por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (rad. No. 11007-02-04-000-2019-01144-01), que en fallo del 21 de agosto de 2019, amparó los derechos fundamentales invocados; ordenó revocar la sentencia anterior y ordenó a la Sala de Casación Laboral dejar sin efecto la decisión del 14 de marzo de 2018 y emitir un nueva providencia, y a la Administradora de Fondos Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, emitir un nuevo acto administrativo reconociendo a favor de Lucy Henao Gómez la pensión de sobrevivientes, y, en caso de haber cancelado los saldos de la cuenta de ahorro individual, procediera al descuento progresivo sobre el monto de las mesadas pensionales[[2]](#footnote-2).

En cumplimiento de lo anterior, por medio de sentencia CSJ SL 4022-2019 del 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por esta Colegiatura[[3]](#footnote-3).

Ante el cumplimiento parcial de la orden judicial, los beneficiarios de la prestación solicitaron que se librara mandamiento por las siguientes sumas de dinero:

1. $14.022.568 por saldo del retroactivo de pensión de sobrevivientes del causante Álvaro Echeverry Castaño generado en favor de su hijo Álvaro Educardo Echeverry Henao entre el 22 de octubre de 2007 y el 22 de octubre de 2010.
2. $153.298.653 por concepto de saldo de retroactivo generado en favor de la cónyuge Lucy Henao Gómez entre el 22 de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2022.

1. Los intereses moratorios a la tasa permitida por la ley, causados entre el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y la fecha en que se produzca el pago total de la obligación. (inciso 1, artículo 431 del C.G.P, en concordancia con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993).
2. Por la suma periódica y vitalicia de $923.334, que corresponde a la diferencia entre la mesada pagada por la ejecutada ($1.000.000) a favor de la señora Lucy Henao Gómez a partir del 1 de octubre de 2022 y la que corresponde realmente para el 2022 a $1.923.334, incrementada anualmente con base en la variación del IPC.

En sustento de la ejecución, los ejecutante manifestaron que la AFP les adeuda la diferencia resultante respecto al salario mínimo legal mensual vigente del año 2007, reconocido por el fondo de privado de pensiones a título de mesada pensional, y el valor al que realmente tienen derecho de acuerdo con el cálculo correcto de la mesada pensional, basado en el número de semanas cotizadas, que estiman en la suma de $1.058.836, incrementada año a año con base en la variación del IPC anual, teniendo en cuenta para el efecto los siguientes factores: i) 903.56 semanas cotizadas en los términos del literal g) artículo 13 de la Ley 100 de 1993, ii) una tasa de remplazo de al menos 65%, conforme al inciso 4, artículo 48 de la Ley 100 de 1993, y iii) un ingreso base de liquidación de $1.628.977, obtenido con la fórmula señalada en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo cotizado por el causante en los últimos 10 años, actualizado al 22 de octubre de 2007.

1. **PROVIDENCIA RECURRIDA.**

En providencia del 29 de noviembre de 2022, el juzgado de conocimiento accedió a librar mandamiento de pago a favor de los solicitantes, estableciendo como valor de la primera mesada pensional la suma de $861.435 que, actualizada en cada anualidad con el IPC, arrojó una diferencia a favor del señor Álvaro Echeverry Henao Gómez de $7.326.429 y de la señora Lucy Henao Gómez del $31.233.957. En esa misma providencia, se incluyeron como obligaciones a cargo de la ejecutada los intereses legales que generen los anteriores valores y las costas del proceso ejecutivo.

 Al motivar la providencia, la *a-quo* señaló que la sentencia ejecutada no estableció suma de dinero alguno, pero sí fijó los parámetros necesarios para liquidar el crédito de manera concreta; en ese orden indicó que al tratarse de una pensión de sobrevivientes reconocida por condición más beneficiosa, debía ser liquidada conforme a los postulados del inciso segundo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que reza *“el monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación…”.* Además, advirtió que no era dable acudir al inciso final de la misma disposición y tener como tasa de reemplazo mínima el 65% del IBL, pues según indicó esta Corporación, con ponencia de quien hoy cumple igual encargo, solo *“… es factible acceder a una pensión de sobrevivientes equivalente al 65% del Ingreso Base de liquidación, en aplicación del inciso en mención final del artículo 48, siempre y cuando el causante haya acreditado la cantidad de semanas exigidas tanto en la Ley 100 de 1993 como en el Acuerdo 049 de 1990, y cuente con menos de 1000 semanas cotizadas. La anterior acotación se hace por cuanto, si el afiliado fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 1000 semanas cotizadas, la primera mesada de sus beneficiarios equivaldría, de entrada, a un 65% del IBL -siguiendo las voces del 2º inciso del aludido artículo 48-, porcentaje que se incrementaría hasta un 75% del IBL si aquel contaba con 1250 semanas o más., tal como lo hizo la entidad demandada en la Resolución No. 011764 de 2008”* (sentencia del 26 de febrero de 2016)

1. **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación insistiendo en que el monto de la primera mesada pensional que le corresponde es del orden de $1.058.836, que actualizado año a año con el IPC, arroja un valor para el año 2022 igual a $1.923.334, ratificando los argumentos de la demanda ejecutiva, en cuanto a la determinación de la primera mesada pensional, señalando que el juzgado obtiene un IBL inferior, esto es, $1.142.189 y una tasa de remplazo del 61% porque prescindió del contenido del inciso 4 del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, que de manera clara y concreta señala que por favorabilidad se puede optar por una pensión equivalente conforme al régimen del ISS vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa, sin limitaciones o restricciones.

Adicionó que el juzgado además de subestimar el IBL y el monto de la pensión, aplicó el IPC como incremento de la pensión previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 199, de 2007 para el año 2008, en 4.48% como si la pensión se hubiera causado en el 2006 y mantiene el error en los años subsiguientes, indicando que el incremento del 1 de enero de 2008 se debe calcular con el IPC del año anterior que fue del 5.69% y así sucesivamente.

1. **COMPETENCIA Y PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN.**

Esta Sala es competente para resolver el recurso impetrado, de acuerdo a lo señalado en el literal b), numeral 1) del artículo 15 del C.P.T. y de la S.S., como quiera que el auto apelado es susceptible del recurso de apelación, según las voces del numeral 8 del artículo 65 ídem, siendo apelable el auto que decida sobre el mandamiento de pago.

1. **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Analizados los alegatos escritos presentados por el ejecutante, mismos que obran en el expediente digital y a los cuales nos remitimos por economía procesal en virtud del artículo 280 del C.G.P., la Sala encuentra que los argumentos fácticos y jurídicos expresados allí concuerdan con los puntos objeto de discusión en esta instancia y se relacionan con el problema jurídico que se expresará más adelante.

1. **PROBLEMA JURÍDICO**

De acuerdo con el esquema del recurso de apelación y en atención al principio de consonancia, le corresponde a la Sala determinar si cuando la sentencia base de recaudo ejecutivo versa sobre una pensión legal en la que no se liquidó la primera mesada pensional, le corresponde al juez de ejecución concretar las sumas adeudadas al momento de librar el mandamiento ejecutivo, y en caso afirmativo, establecer si el mandamiento ejecutivo librado el 29 de noviembre de 2022 se encuentra conforme a derecho.

1. **CONSIDERACIONES:**
	1. **Ejecución de cantidad líquida de dinero y obligaciones periódicas o de tracto sucesivo.**

En lo que interesa a la resolución del recurso impetrado, debe la Colegiatura empezar por destacar que el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, previene que, en materia laboral, son exigibles por la vía ejecutiva, entre otras, las obligaciones laborales que emanen de una decisión judicial en firme. Por su parte, el artículo 430 del C.G.P., aplica en este caso por la remisión que ordena el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., señala que *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”.* Y, en cuanto a la ejecución de sumas de dinero y obligaciones periódicas o de tracto sucesivo, como la que aquí se persigue, previene el artículo 431 ídem, que *“Si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda…”* y *“cuando se trate de alimentos u otra prestación periódica, la orden de pago comprenderá además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen y dispondrá que estas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo vencimiento…”.*

En este orden de ideas, **el hecho de que una providencia verse sobre una “cantidad liquida” que de acuerdo con el artículo 424 ídem, no solo es la expresada en una cifra numérica -que es la regla general y lo deseable en todos los casos- sino aquella que sea liquidable por operación aritmética, siempre que no esté sujeta a deducciones indeterminadas,** la aleja de aquellas condenas denominadas en abstracto, proscritas en el derecho procesal desde la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1989, como ordenó el artículo 307 del C.P.C hoy reglado en el 283 del C.G.P aplicable por analogía en materia laboral.

Sobre esta misma materia tuvo oportunidad de pronunciarse el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, en sentencia del 27 de julio de 2005, Rad. 21517, en la que señaló que la concreción de una condena en la que se ordenó el pago de una pensión, sin establecer el monto de la misma, era posible *“a partir de los datos consignados tanto en la parte motiva, como en la resolutiva de la providencia atacada, y sin que para ello deba acudirse a operaciones aritméticas complejas o a hacer deducciones indeterminadas”* y concluyó que *“el hecho de que en la sentencia no se hubiera señalado en forma específica la cantidad numérica del monto de la pensión del actor, no significa que la condena haya sido ‘in genere’, dado que, con el valor probado del salario y los parámetros dictados por el ad quem para la actualización de la pensión reconocida con base en él, resulta liquidable en concreto por el ente demandado”.*

* 1. **Caso concreto**

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el titulo base de la orden compulsiva no estableció el monto de la mesada pensional cuyo pago se ordenó, lo que *prima facie* podría llevar a concluir que la orden judicial fue *“in genere”* o abstracta, en la medida que no se acompaña de la sentencia complementaria reglada en el artículo 284 del C.G.P y, por tanto, el titulo carecería de la explicitud y claridad que exige el artículo 422 del C.G.P., para que preste mérito ejecutivo. No obstante, teniendo en cuenta que lo ordenado judicialmente es el pago de una pensión de origen legal, es evidente que su liquidación surge de la aplicación de fórmulas matemáticas preestablecidas en la ley, de modo que el establecimiento de su monto no está sujeto a deducciones indeterminadas y, por tanto, es cuantificable como “cantidad liquida”, que de acuerdo con el artículo 424 ídem, se itera, no solo es la expresada en una cifra numérica sino aquella que sea liquidable por operación aritmética, siempre que no esté sujeta a las ya enunciadas deducciones indeterminadas.

Bajo las anteriores premisas, acertó la jueza de la ejecución al concretar el monto de la primera mesada pensional como presupuesto necesario para el cumplimiento forzoso de la sentencia judicial objeto de ejecución, con lo cual se garantiza la eficacia de la orden judicial y con ello los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia, que se expresan, en este caso, como el derecho de una persona a cuyo favor se ha resuelto una sentencia judicial, a que el Estado le garantice *“que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad”*, tal como lucidamente lo ha entendido la Corte Constitucional al definir el alcance del derecho fundamental de acceso a la justicia (ver, entre otras sentencias, T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Al hilo de lo hasta aquí expuesto, es del caso pasar a verificar la corrección del valor del crédito cuyo pago se exige por la vía ejecutiva. Para ello, de entrada, encuentra la Sala que la razón vuelve a ponerse del lado de la *a-quo* al advertir que el monto de la pensión (entendido como la tasa de reemplazo) en este caso se debe obtener con arreglo en lo dispuesto en los tres primeros incisos del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, puesto que el último inciso, que permite optar por una tasa de reemplazo del 65% del IBL, solo es aplicable para aquellos afiliados en quienes concurre la satisfacción de las condiciones de acceso a la pensión de sobrevivientes bajos los requisitos de ambos regímenes pensionales, esto es, para el caso de marras, de Ley 100 y del Acuerdo 049 de 1990, tal como desde antaño lo ha interpretado esta Corporación acudiendo al entendimiento que sobre la materia tiene el órgano de cierre de la especialidad laboral, expresado en sentencia del 3 de junio de 2015, Rad. 53692, en la que explicó:

*“… como lo sostuvo el Tribunal, el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 simplemente regula los montos de las pensiones de sobrevivientes, en tratándose de afiliados o pensionados, así como la posibilidad especial de optar por un monto pensional equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, más elevado que el que se pudiera obtener en condiciones normales, pero, debe entenderse, dirigida a quienes ya tienen debidamente causado ese derecho con arreglo a la normatividad vigente, pues, es necesario insistir, la disposición simplemente regula el monto de la prestación sin establecer condiciones para la causación de la misma. Esto es que, la norma contempla la posibilidad de superar el monto de la pensión en algunas condiciones en las que se cumplen simultáneamente los requisitos de la norma anterior y los de la Ley 100 de 1993, pero no una pensión de sobrevivientes diferente.*

*Lo contrario implicaría reconocer la existencia expresa de un régimen de transición en materia de pensiones de sobrevivientes que no puede derivarse del contexto integral y sistemático de la Ley 100 de 1993 y de sus modificaciones, así como de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación, pues, se repite, el querer del legislador siempre se ha orientado a circunscribir la causación de tal prestación a partir y con fundamento en las normas vigentes en el momento de la muerte.”*

En otras palabras, como ya lo ha dicho esta Corporación, verbigracia en la sentencia citada en primera instancia[[4]](#footnote-4), *“es factible acceder a una pensión de sobrevivientes equivalente al 65% del Ingreso Base de liquidación, en aplicación del inciso en mención final del artículo 48, siempre y cuando el causante haya acreditado la cantidad de semanas exigidas tanto en la Ley 100 de 1993 como en el Acuerdo 049 de 1990, y cuente con menos de 1000 semanas cotizadas. La anterior acotación se hace por cuanto, si el afiliado fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 1000 semanas cotizadas, la primera mesada de sus beneficiarios equivaldría, de entrada, a un 65% del IBL -siguiendo las voces del 2º inciso del aludido artículo 48-, porcentaje que se incrementaría hasta un 75% del IBL si aquel contaba con 1250 semanas o más”.*

Por lo anterior, teniendo en cuenta que los demandantes no cumplen con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes bajo las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993, y alcanzaron la gracia pensional con arreglo en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, es evidente que no resulta aplicable en su caso el inciso final del artículo 48 ídem, amén de que solo cumplen con los requisitos de acceso previstos en uno de los dos regímenes y no de ambos, como lo exige el citado precepto normativo, de modo que, con base en la densidad de semanas que acumuló en su haber el causante, la tasa de reemplazo sobre el IBL corresponde al 61%, como acertadamente se estableció en primera instancia.

En cuanto al IBL, efectuados los cálculos en esta instancia, encuentra la Colegiatura que el mismo asciende a la suma de $1.412.162,17 al 2007, al que, aplicada la tasa de reemplazo del 61%, deriva en una primera mesada por valor $861.419,00, como se ve en la siguiente liquidación:

|  |
| --- |
| **LIQUIDACIÓN DEL IBL PENSIONAL PROMEDIO ÚLTIMOS AÑOS** |
| **PERIODOS DE COTIZACIÓN** |  |
| **DESDE** | **HASTA** | **FECHA DONDE SE HIZO LA ÚLTIMA COTIZACIÓN:** | **2003-12** |
| **Año** | **Mes** | **Día** | **Año\_** | **Mes\_** | **Día\_** | **# Días** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** | **IPC FINAL** | **IPC INICIAL** | **INGRESO MENSUAL ACTUALIZADO Ó INDEXADO** | **PROMEDIO SALARIAL** |
| 1993 | 7 | 23 | 1993 | 11 | 30 | 130 | $ 234.720 | 49,83 | 12,14 | $ 963.435 | $34.791 |
| 1994 | 2 | 14 | 1994 | 3 | 31 | 46 | $ 312.762 | 49,83 | 14,89 | $ 1.046.671 | $13.374 |
| 1994 | 4 | 1 | 1994 | 12 | 1 | 245 | $ 292.762 | 49,83 | 14,89 | $ 979.740 | $66.677 |
| 1995 | 3 | 1 | 1995 | 3 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 4 | 1 | 1995 | 4 | 30 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 5 | 1 | 1995 | 5 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 6 | 1 | 1995 | 6 | 30 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 7 | 1 | 1995 | 7 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 8 | 1 | 1995 | 8 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 9 | 1 | 1995 | 9 | 30 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 10 | 1 | 1995 | 10 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 11 | 1 | 1995 | 11 | 30 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 18,25 | $ 1.005.848 | $8.382 |
| 1995 | 12 | 1 | 1995 | 12 | 31 | 30 | $ 348.387 | 49,83 | 18,25 | $ 951.240 | $7.927 |
| 1996 | 1 | 1 | 1996 | 1 | 31 | 30 | $ 368.387 | 49,83 | 21,80 | $ 842.052 | $7.017 |
| 1996 | 2 | 1 | 1996 | 2 | 29 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 3 | 1 | 1996 | 3 | 31 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 4 | 1 | 1996 | 4 | 30 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 5 | 1 | 1996 | 5 | 31 | 30 | $ 315.802 | 49,83 | 21,80 | $ 721.854 | $6.015 |
| 1996 | 6 | 1 | 1996 | 6 | 30 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 7 | 1 | 1996 | 7 | 31 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 8 | 1 | 1996 | 8 | 31 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 9 | 1 | 1996 | 9 | 30 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 10 | 1 | 1996 | 10 | 31 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 11 | 1 | 1996 | 11 | 30 | 30 | $ 461.181 | 49,83 | 21,80 | $ 1.054.158 | $8.785 |
| 1996 | 12 | 1 | 1996 | 12 | 31 | 30 | $ 436.181 | 49,83 | 21,80 | $ 997.014 | $8.308 |
| 1997 | 1 | 1 | 1997 | 1 | 31 | 30 | $ 436.181 | 49,83 | 26,52 | $ 819.566 | $6.830 |
| 1997 | 2 | 1 | 1997 | 2 | 28 | 30 | $ 637.379 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.609 | $9.980 |
| 1997 | 3 | 1 | 1997 | 3 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 4 | 1 | 1997 | 4 | 30 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 5 | 1 | 1997 | 5 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 6 | 1 | 1997 | 6 | 30 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 7 | 1 | 1997 | 7 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 8 | 1 | 1997 | 8 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 9 | 1 | 1997 | 9 | 30 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 10 | 1 | 1997 | 10 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 11 | 1 | 1997 | 11 | 30 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1997 | 12 | 1 | 1997 | 12 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 26,52 | $ 1.197.607 | $9.980 |
| 1998 | 1 | 1 | 1998 | 1 | 31 | 30 | $ 637.378 | 49,83 | 31,21 | $ 1.017.640 | $8.480 |
| 1998 | 2 | 1 | 1998 | 2 | 28 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 3 | 1 | 1998 | 3 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 4 | 1 | 1998 | 4 | 30 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 5 | 1 | 1998 | 5 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 6 | 1 | 1998 | 6 | 30 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 7 | 1 | 1998 | 7 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 8 | 1 | 1998 | 8 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 9 | 1 | 1998 | 9 | 30 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 10 | 1 | 1998 | 10 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 11 | 1 | 1998 | 11 | 30 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1998 | 12 | 1 | 1998 | 12 | 31 | 30 | $ 753.150 | 49,83 | 31,21 | $ 1.202.482 | $10.021 |
| 1999 | 1 | 1 | 1999 | 1 | 29 | 29 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.629 |
| 1999 | 2 | 1 | 1999 | 2 | 28 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 3 | 1 | 1999 | 3 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 4 | 1 | 1999 | 4 | 30 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 5 | 1 | 1999 | 5 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 6 | 1 | 1999 | 6 | 30 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 7 | 1 | 1999 | 7 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 8 | 1 | 1999 | 8 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 9 | 1 | 1999 | 9 | 30 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 10 | 1 | 1999 | 10 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 11 | 1 | 1999 | 11 | 30 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 1999 | 12 | 1 | 1999 | 12 | 31 | 30 | $ 873.654 | 49,83 | 36,42 | $ 1.195.337 | $9.961 |
| 2000 | 1 | 1 | 2000 | 1 | 31 | 30 | $ 917.337 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.804 | $9.573 |
| 2000 | 2 | 1 | 2000 | 2 | 29 | 30 | $ 917.337 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.804 | $9.573 |
| 2000 | 3 | 1 | 2000 | 3 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 4 | 1 | 2000 | 4 | 30 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 5 | 1 | 2000 | 5 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 6 | 1 | 2000 | 6 | 30 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 7 | 1 | 2000 | 7 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 8 | 1 | 2000 | 8 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 9 | 1 | 2000 | 9 | 30 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 10 | 1 | 2000 | 10 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 11 | 1 | 2000 | 11 | 30 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2000 | 12 | 1 | 2000 | 12 | 31 | 30 | $ 917.000 | 49,83 | 39,79 | $ 1.148.382 | $9.570 |
| 2001 | 1 | 1 | 2001 | 1 | 31 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 2 | 1 | 2001 | 2 | 28 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 3 | 1 | 2001 | 3 | 31 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 4 | 1 | 2001 | 4 | 30 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 5 | 1 | 2001 | 5 | 31 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 6 | 1 | 2001 | 6 | 30 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 7 | 1 | 2001 | 7 | 31 | 30 | $ 927.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.067.539 | $8.896 |
| 2001 | 8 | 1 | 2001 | 8 | 31 | 30 | $ 1.270.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.462.540 | $12.188 |
| 2001 | 9 | 1 | 2001 | 9 | 30 | 30 | $ 970.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.117.058 | $9.309 |
| 2001 | 10 | 1 | 2001 | 10 | 31 | 30 | $ 970.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.117.058 | $9.309 |
| 2001 | 11 | 1 | 2001 | 11 | 30 | 30 | $ 970.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.117.058 | $9.309 |
| 2001 | 12 | 1 | 2001 | 12 | 31 | 30 | $ 970.000 | 49,83 | 43,27 | $ 1.117.058 | $9.309 |
| 2002 | 1 | 1 | 2002 | 1 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 2 | 1 | 2002 | 2 | 28 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 3 | 1 | 2002 | 3 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 4 | 1 | 2002 | 4 | 30 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 5 | 1 | 2002 | 5 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 6 | 1 | 2002 | 6 | 30 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 7 | 1 | 2002 | 7 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 8 | 1 | 2002 | 8 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 9 | 1 | 2002 | 9 | 30 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 10 | 1 | 2002 | 10 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 11 | 1 | 2002 | 11 | 30 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2002 | 12 | 1 | 2002 | 12 | 31 | 30 | $ 1.275.000 | 49,83 | 46,58 | $ 1.363.960 | $11.366 |
| 2003 | 1 | 1 | 2003 | 1 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 2 | 1 | 2003 | 2 | 28 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 3 | 1 | 2003 | 3 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 4 | 1 | 2003 | 4 | 30 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 5 | 1 | 2003 | 5 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 6 | 1 | 2003 | 6 | 30 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 7 | 1 | 2003 | 7 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 8 | 1 | 2003 | 8 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 9 | 1 | 2003 | 9 | 30 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 10 | 1 | 2003 | 10 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 11 | 1 | 2003 | 11 | 30 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
| 2003 | 12 | 1 | 2003 | 12 | 31 | 30 | $ 1.313.000 | 49,83 | 49,83 | $ 1.313.000 | $10.942 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Total Días** | **3600** |  |  |  | **Sumatoria de Promedios** | **$1.147.367,37** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL** |
|  | AÑO | MES | (LOS IPC son anualizados) |
| Fecha primera mesada | 2007 | 10 | IPC-Final | 61,33 |
| Fecha última cotización | 2003 | 12 | IPC- inicial | 49,83 |
| IBL a fecha de la última cotización  | $1.147.367,37 |
| IBL INDEXADO | $1.412.162,17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IBL** | **#Semanas** | **%Tasa reemplazo** | **Mesada pensional inicial** |
| $1.412.162 | 903,57 | 61,00 | $681.419,00 |

Establecido lo anterior, realizados los cálculos de la diferencia pensional, teniendo en cuenta para el efecto la mesada mínima que han venido percibiendo los ejecutantes, se observa que el valor dejado de cancelar en favor de Álvaro Echeverri Henao, entre el 23 de octubre de 2007 y el 23 de octubre de 2010, asciende a la suma de **$9.812.559** y, el adeudado a la señora Lucy Henao Gómez, entre el 23 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2022 a **$99.299.166**, por lo que se accederá parcialmente al recurso impetrado, ordenándole a la jueza de instancia que proceda a librar el mandamiento de pago en la forma señalada en el presente proveído, conforme a los valores que se expresan a continuación en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **IPC** | **VALOR MESADA** | **PENSIÓN PROTECCIÓN** | **N° MESADAS** | **DIFERENCIA** | **TOTAL MADRE** | **TOTAL HIJO** |
| 2007 | 5,69% | $ 861.419 | $ 433.700 | 3,2 | $ 427.719 | $ 684.350 | $ 684.350 |
| 2008 | 7,67% | $ 910.433 | $ 461.500 | 14 | $ 448.933 | $ 3.142.531 | $ 3.142.531 |
| 2009 | 2,00% | $ 980.264 | $ 496.900 | 14 | $ 483.364 | $ 3.383.548 | $ 3.383.548 |
| 2010 | 3,17% | $ 999.869 | $ 515.000 | 14 | $ 484.869 | $ 4.186.036 | $ 2.602.130 |
| 2011 | 3,73% | $ 1.031.565 | $ 535.600 | 14 | $ 495.965 | $ 6.943.510 | $ 0 |
| 2012 | 2,44% | $ 1.070.042 | $ 566.700 | 14 | $ 503.342 | $ 7.046.788 | $ 0 |
| 2013 | 1,74% | $ 1.096.151 | $ 589.500 | 14 | $ 506.651 | $ 7.093.114 | $ 0 |
| 2014 | 3,66% | $ 1.115.224 | $ 616.000 | 14 | $ 499.224 | $ 6.989.136 | $ 0 |
| 2015 | 6,77% | $ 1.156.041 | $ 644.350 | 14 | $ 511.691 | $ 7.163.674 | $ 0 |
| 2016 | 5,75% | $ 1.222.514 | $ 689.455 | 14 | $ 533.059 | $ 7.462.826 | $ 0 |
| 2017 | 4,09% | $ 1.292.808 | $ 737.717 | 14 | $ 555.091 | $ 7.771.274 | $ 0 |
| 2018 | 3,18% | $ 1.345.684 | $ 781.242 | 14 | $ 564.442 | $ 7.902.188 | $ 0 |
| 2019 | 3,80% | $ 1.388.477 | $ 828.116 | 14 | $ 560.361 | $ 7.845.054 | $ 0 |
| 2020 | 1,61% | $ 1.441.239 | $ 877.803 | 14 | $ 563.436 | $ 7.888.104 | $ 0 |
| 2021 | 5,62% | $ 1.464.443 | $ 908.526 | 14 | $ 555.917 | $ 7.782.838 | $ 0 |
| 2022 |   | $ 1.546.745 | $ 1.000.000 | 11 | $ 546.745 | $ 6.014.195 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 99.299.166** | **$ 9.812.559** |

Cabe agregar, que el error de la a-quo no radicó en el cálculo de la primera mesada, pues entre el monto calculado en primera instancia ($861.435) y el establecido en esta oportunidad ($861.419) solo hay una diferencia de 16 pesos. El error ostensible deviene de la omisión de la suma de la totalidad de los montos que arrojó la diferencia del retroactivo pensional, como quiera que la jueza solo sumó el resultado obtenido para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de la columna “total”.

Por último, se confirmará la decisión de no librar orden de pago por concepto de intereses moratorios, porque pese a que estos fueron ordenados en la sentencia objeto de ejecución, posteriormente fueron objeto de transacción, tal como se aprecia en el documento aportado por los ejecutantes, suscrito el 26 de abril de 2016 por el apoderado, cuya facultad había sido otorgada por los beneficiarios, y de la que se desprende que las partes transaron los intereses moratorios, indexación, costas judiciales y agencias en derecho en la suma de $40.000.000[[5]](#footnote-5).

Por lo anterior, se revocará el auto recurrido y no se impondrán costas debido a que no se ha trabado la litis.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda)**, **Sala Laboral No. 1**,

**RESUELVE**

**PRIMERO: MODIFICAR** el numeral primero del auto del 29 de noviembre de 2022, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por medio del cual se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo laboral de la referencia, y en su defecto, **ORDENAR** que se libre mandamiento de pago, en el siguiente sentido:

**PRIMERO: Librar mandamiento de pago** por la vía ejecutiva laboral a favor de Álvaro Echeverri Henao y Lucy Henao Gómez y en contra de la Colfondos, por la obligación de hacer:

Disponer que la ejecutada debe reajustar la pensión de invalidez que viene pagando a la señora Lucy Henao Gómez para el año 2022 en cuantía de $1.546.745.

Por las siguientes sumas de dinero:

a) $9.812.559 por el valor dejado de cancelar en favor de Álvaro Echeverri Henao entre el 23 de octubre de 2007 y el 23 de octubre de 2010.

b) Por la suma de $99.299.166 por lo dejado de cancelar a la señora Lucy Henao Gómez entre el 23 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2022.

c) Por los intereses legales que generen las anteriores sumas de dinero.

d) Por las costas que genere el presente proceso.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás la providencia recurrida.

**TERCERO:** Sin Costas.

**Notifíquese y cúmplase**

 La Magistrada ponente,

**ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**

Los Magistrados,

**GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

 Con salvamento de voto

Radicación Nro.: 6600131050042008008302

Proceso: Ordinario Laboral

Demandante: Lucy Henao Gómez y Álvaro Eduardo Echeverry Henao

Demandado: Colfondos S.A.

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL**

**SALA DE FAMILIA**

MAGISTRADO: **JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

Pereira, [2] de noviembre de dos mil veintitrés [2023].

**SALVAMENTO DE VOTO**

Tal como lo propuse en la ponencia que presenté inicialmente, considero que, el auto de 29 de noviembre de 2022 mediante el cual el despacho de primera instancia libró mandamiento de pago debió ser revocado, para en su lugar denegar el mismo, con condena en costas a cargo del ejecutante.

Los argumentos que sustentan mi alejamiento de lo decidido por la mayoría en esta segunda instancia, se basan en los siguientes supuestos jurídicos y análisis del caso, partiendo de la necesidad de resolver como problemas jurídicos, si:

**¿Puede el juez determinar el valor de la mesada pensional en el trámite ejecutivo, cuando en la sentencia que sirve de título de recaudo no fue establecido tal monto?**

Para resolver el interrogante formulado propuse hacer las siguientes precisiones:

1. **DE LA EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL.**

Dispone el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social las obligaciones que son exigibles por la vía ejecutiva en materia laboral, siendo estas las originadas en una relación de trabajo, que consten que emanen de una **decisión judicial o arbitral en firme.**

A su vez, el artículo 306 del Código General del Proceso establece que, cuando se trate de ejecución de sentencias, el ejecutante puede solicitar, sin necesidad de presentar demanda, la ejecución del fallo ante el juez del conocimiento, para que adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada, sin necesidad de presentar demanda.

También indica la norma que, formulada la solicitud, el juez librará mandamiento de pago de acuerdo con la parte resolutiva de la providencia.

1. **CONTROL OFICIOSO DE LEGALIDAD**

El Código General del Proceso establece en el inciso artículo 430 que “Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”.

No obstante esa limitante, para la Sala de Casación Civil, es sólo aparente que haya desaparecido el control de legalidad en la medida en que estima que el operador judicial no ha perdido la potestad – deber de realizar dicho control en garantía de los derechos sustanciales de las partes.

De allí que en providencia de fecha 11 de septiembre de 2017, Rad. 2017-00358-01, esa Corporación señaló lo siguiente:

"... se recuerda que los jueces tienen dentro de sus obligaciones, a la hora de dictar sus fallos, revisar, nuevamente, los presupuestos de los instrumentos de pago, “potestad-deber” que se extrae no sólo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual Código General del Proceso.

Sobre lo advertido, esta Corte recientemente explicitó:

“(…) [R]elativamente a específicos asuntos como el auscultado, al contrario de lo argüido por la (…) quejosa, sí es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisión del «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia (…)”.

“(…)”.

“Y es que sobre el particular de la revisión oficiosa del título ejecutivo esta Sala precisó, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente:

“En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (…), dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, «en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (…) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que “la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal (…)”.

“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (…)”.

Fue con base en lo anterior que el fondo del asunto propuse resolverlo como lo señalo a continuación.

**“CASO CONCRETO**.

De acuerdo con los antecedentes antes vertidos, el título de recaudo presentado por la parte ejecutante consiste en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 10 de noviembre de 2009, en el que fue condenada la AFP Colfondos a pagar la pensión de sobrevivientes a la señora Lucy Henao Gómez y Álvaro Eduardo Echeverry Henao en un 50% para cada uno, a partir del 22 de octubre de 2007. El monto de dicha prestación, según la misma providencia, debía establecerlo el fondo de pensiones demandado de acuerdo con la ley y las cotizaciones realizadas por el causante, sin que pudiera resultar inferior al salario mínimo.

De acuerdo con la literalidad de sentencia, la obligación del fondo de pensiones era reconocer la pensión de sobrevivientes en los porcentajes asignados a cada uno de los beneficiarios, **sin que mediara un monto especifico frente a la primera mesada pensional**, toda vez que, de concretar la condena no se ocupó el juzgador de primer grado ni tampoco la Sala de Casación Laboral que casó la sentencia de este Tribunal.

Es por lo anterior que, al haber dejado tal punto por fuera de la litis, **no era dable en el trámite ejecutivo definir el valor de la primera mesada pensional como lo hizo la a quo**, pues si bien la sentencia que reconoció el derecho pensional se constituye en el título de recaudo, en la misma se le ordenó a la entidad demandada, establecer el valor de la mesada pensional de conformidad con la ley, imponiendo como único límite que esta no fuera inferior al salario mínimo.

Frente a este tema, tuvo la Sala la oportunidad de pronunciarse en reciente providencia, donde fungió como ponente quien cumple el mismo encargo en la actualidad, en la que se indicó:

“Conviene resaltar que, si bien considera la Sala que desde el primer proceso se debieron establecer los parámetros para determinar el monto de la mesada pensional, previa deliberación de los mismos en el proceso; el hecho de que no se haya definido tal punto por el juzgado en esa oportunidad, quedando una decisión abstracta sobre el punto, es la razón que obligó al actor a iniciar un nuevo proceso ordinario, porque contrario a lo afirmado por la recurrente, la acción ejecutiva habría sido ineficaz para lograr tal objetivo, dado que el valor de la primera mesada pensional no integra el título ejecutivo.

Y es que no puede perderse de vista que, tal como lo advierte la apoderada de Colpensiones, la especialidad, en trámites ejecutivos, ha determinado el valor de los intereses moratorios ordenados en las sentencias que sirven de título de recaudo, pero ello solo ocurre en razón a que su liquidación se basa en una fórmula establecida por la Superintendencia Bancaria y,  porque además, para esa etapa de la ejecución, se cuenta con los datos necesarios para establecer el monto de dicho concepto, como por ejemplo i) valor de la mesada pensional, ii) número de mesadas anuales, iii) fecha a partir de la cual deben calcularse dichos réditos y  iv) la data en la que finaliza su contabilización.

**Contrario a ello, la definición del monto de la mesada pensional no es un tema pacífico ni meramente aritmético, pues en el establecimiento de su valor convergen varios factores y se hace necesario el análisis de diversas disposiciones legales que no pueden ser definidas en un proceso ejecutivo, diseñado para reclamar el pago de obligaciones claras, expresas y exigibles”**.

La anterior cita era necesaria para concluir que, en este evento, habiendo sido pagada la mesada pensional a los señores Álvaro Eduardo Echeverry Henao y Lucy Henao Gómez en cuantía equivalente al salario mínimo, ninguna obligación se encuentra a cargo de Colfondos, dado que dio cumplimiento a la orden judicial bajo los parámetros impuestos por el juzgado de conocimiento.

Lo anterior implica entonces que la inconformidad advertida por el recurrente debe encausarla en un proceso ordinario que determine tal aspecto, pues como viene de verse existe divergencia entre los cálculos efectuados por la AFP Colfondos S.A., los realizados por los ejecutantes y la liquidación que contempló el Juzgado, lo cual pone de manifiesto el conflicto que existe frente al tema, el cual no es propio de las acciones ejecutivas concebidas para reclamar obligaciones, claras, expresas y exigibles, requisitos formales del título judicial que se echan de menos en este asunto.

De acuerdo con lo expuesto, en ejercicio del control oficioso de legalidad que permite al operador judicial establecer en cualquier etapa del proceso la acreditación de tales presupuestos, se revocará la decisión impugnada para en su lugar negar el mandamiento de pago pretendido, lo cual, de paso sea dicho, no atenta contra el principio de la no reformatio in pejus, pues es deber de la Sala determinar, como primera medida, la existencia de la obligación que se pretende cobrar por la vía ejecutiva.

Costas en esta Sede a cargo de la parte recurrente.”

Como puede verse, mi criterio difiere sustancialmente del que tuvieron los demás miembros de la Sala y es por eso por lo que, salvo mi voto, como acá queda hecho.

**JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

Magistrado

1. Archivo 28 cuaderno recurso extraordinario de casación [↑](#footnote-ref-1)
2. Archivo 37 cuaderno recurso extraordinario de casación. [↑](#footnote-ref-2)
3. Archivo 43 cuaderno recurso extraordinario de casación. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tribunal Superior de Pereira- Sala Laboral, sentencia del 26 de febrero de 2016 dentro del proceso bajo radicado 66001-31-05-002-2013-00623-01. M.P Ana Lucía Caicedo Calderón. [↑](#footnote-ref-4)
5. Archivo 02, páginas 28 a 32 cuaderno primera instancia, subcarpeta “C03Ejecutivo”. [↑](#footnote-ref-5)